

Querida hermana:

Han pasado ya cien días de gobierno de Alfonsín. Y cien días de mi entrada a la función pública. Rompiendo la rutina de los porteños, hemos sido muchos los que pasamos el verano en Buenos Aires. En mi caso estoy yendo a mi oficina en el Octavo Piso del edificio del Ministerio de Economía. Allí, además de Juan Sourrouille y Adolfo Canitrot, estoy acompañado por otros subsecretarios: José Luis Machinea y Ricardo Carciofi, dos jóvenes economistas también debutantes en cargo públicos.

Ciertamente, yo también he cambiado: de golpe fui sacado del ambiente recoleto de un instituto de investigación y lanzado si no justamente al frente por lo menos a la antesala de la toma de decisiones de gobierno. Resultado esperable: dificultades para pasar las noches por obra de incesantes debates sobre la actualidad política en medio del sueño. Espero que la situación se enfríe lo suficiente para recuperar un mínimo de control sobre mí mismo. Por ahora, y a pesar de mis quejas, estoy sacando partido del lugar donde estoy: me entero, aprendo, es toda una nueva y atractiva experiencia. Como me destaco

entre mis colegas economistas por mis dotes literarias, ya me han incorporado a la lista de los que escriben discursos.

¿Qué puedo decir, pues, como resumen de estos primeros cien días? Es difícil comprimir en una mirada sintética la variedad de acontecimientos por los que hemos pasado. Por otra parte, cualquier comentario mío tiene un sesgo previsible, sea porque me muevo dentro de un área específica del gobierno –la economía– que, aunque importante, no cubre todo el panorama, sea porque en mi percepción pesa también mi modo personal de vivir estos días bajo la flamante democracia que tenemos.

Suele afirmarse que todo nuevo elenco que llega al poder dedica el primer año a instalarse y a aprender a gobernar. Pasar del llano a las esferas del poder obliga siempre a reajustes, sobre todo cuando se ha estado mucho tiempo en la oposición. Sus principales figuras son hombres que hicieron su experiencia de gobierno hace unos veinte años y en una Argentina, por muchas razones, diferente a la de hoy. Además, es preciso conocer la maquinaria gubernamental, digerir la nueva información que se recibe desde dentro de ella, modificar la perspectiva con la que se piensan los problemas públicos. La condición de opositor acostumbra a practicar la crítica pero no es una buena escuela para proponer soluciones.

Te digo todo esto para ubicar el ángulo desde el que hay que juzgar los cien días de gobierno. Es indudable que estamos frente a un proceso de aprendizaje: muchos de los críticos de la administración radical pasan por encima ese proceso y son excesivamente duros. Sin embargo, creo que en la dureza de las críticas influye algo más que el desconocimiento de las dificultades a las que se confronta todo nuevo elenco. Esa dureza es también la expresión de una forma de encarar las cosas de la vida pública que está dominada por la impaciencia: no hay un horizonte temporal dilatado sino un sentido de urgencia permanente, que obliga a los gobiernos a rendir examen en el muy corto plazo. Es verdad que la Argentina es un país institucionalmente inestable y ello conduce a que todo se juegue en

el presente porque el mañana no puede darse por descontado. Los problemas de la coyuntura en la que estamos son además problemas de gran porte e imponen respuestas inmediatas, y ello no facilita contar con el tiempo necesario para aprender a gobernar. Diría que tendremos que esperar todavía un cierto tiempo más para saber cuál será, en definitiva, la orientación de las nuevas autoridades. No estoy diciendo con esto que se pueda esperar cualquier cosa: los postulados básicos que dieron forma a la alternativa política que encarnó Alfonsín marcarán el rumbo. Pero hay que tener en cuenta los cambios que forzosamente habrá de introducir la dinámica de la propia realidad del país —una realidad que con frecuencia no se somete dócilmente a los deseos y aspiraciones de los que llegan al poder—. Cabe esperar, entonces, que a lo largo del año que tenemos por delante habrá de producirse un reajuste en la dirección ideal del gobierno. Sería deseable que ese reacomodamiento fuera el fruto de la propia decisión de las autoridades y no un viraje impuesto por las circunstancias.

Un buen ejemplo de lo que vengo diciendo es lo que está sucediendo en las relaciones del gobierno con la dirigencia sindical. Llegado al poder en andas del impacto de su campaña electoral, Alfonsín se propuso cumplir con una de sus banderas más caras: la democratización de la vida interna de los sindicatos. A su juicio, la clase política había revalidado sus títulos en los recientes comicios; ahora le llegaba a los dirigentes gremiales el turno de hacerlo, luego del prolongado ostracismo durante el régimen militar. Para ello optó por una estrategia de ataque, convencido de que la razón política estaba de su lado. El intento terminó en un flagrante fracaso: el 15 de marzo, mediante el voto negativo del Senado, el Congreso no aprobó el proyecto de ley del ministro Mucci, que apuntaba a introducir garantías a la democracia sindical. El gobierno se quedó, así, sin instrumentos para actuar en ese terreno o, peor, se quedó en manos de la legislación vigente, producida por la dictadura militar. De allí que se haya visto forzado a cambiar la estrategia que tanto había antagonizado a la cúpula sindical para encon-

trar una salida negociada. Este ejemplo refleja bien el proceso casi natural de reacomodamiento del gobierno al tener que actuar sobre una realidad que ofrece resistencias. El ejemplo tiene también el mérito de iluminar un momento importante en la trayectoria del gobierno de Alfonsín. Hasta allí parecía que avanzaba triunfalmente sostenido por el mismo ímpetu con el que había conducido su campaña electoral. El rechazo de la ley de democratización sindical detuvo su marcha. Hoy en día el gobierno parece un ejército que, luego de un avance arrollador, se encuentra bloqueado por las dificultades del terreno, por los obstáculos que van dejando sus adversarios en retirada.

Con esta imagen a la vista de todos se comprende que ganen relevancia los problemas en el campo económico, donde el gobierno está perdiendo día a día la iniciativa. Dentro de este marco se inserta el debut de la presidencia de Alfonsín. El primer trimestre de 1984 se ha cerrado con una tasa de inflación del 50%, que recuerda, por su magnitud, el descalabro económico del último tramo del gobierno de Isabel Perón. Un ingrediente principal del actual empuje inflacionario es el aumento registrado en el precio de la carne, producto a la vez del incremento de la demanda generado por los mejores salarios y de la disminución de la oferta, cuyo origen se remonta a la reducción del stock ganadero operada en los últimos años. El nuevo gobierno democrático ha venido a encontrar su talón de Aquiles en uno de los atributos de la identidad argentina: su pasión carnívora.

Frente a una realidad económica que no se comporta de acuerdo a las pautas que mes a mes fija el gobierno, cunde la desazón entre los funcionarios y se multiplican los ácidos comentarios de los observadores. La lógica de la política económica actual, por la que las autoridades ajustan por anticipado el valor de los salarios, las tarifas de los servicios públicos, la tasa de interés, el nivel del tipo de cambio y, más en general, el conjunto de los precios en función de un cálculo estimado de la inflación para el mes siguiente conduce a una situación peligrosa: la multiplicación de los controles oficiales

para sujetar el comportamiento de los agentes económicos a las directivas gubernamentales. Parece evidente que por ese camino el gobierno se desliza hacia un enfrentamiento con las organizaciones de empresarios y trabajadores. Me pregunto: ¿habrá que escoger, en cambio, una política de concertación que involucre a dichas organizaciones en el diseño y gestión de la marcha de la economía y logre, en consecuencia, obtener su consenso? Esta alternativa es más fácil de formular que de llevar a la práctica. ¿Cuáles son las organizaciones que tienen representatividad suficiente para ser convocadas? ¿Cómo evitar que entre las organizaciones existentes surjan desertores que rompan filas y cuestionen a los que acudan al llamado? Hasta ahora Alfonsín ha mostrado poco entusiasmo ante la idea de la concertación porque ella implica entregar porciones del poder de decisión de su flamante gobierno. En este sentido, es sugestivo que sean los peronistas quienes más insistan en los acuerdos y critiquen la soberbia del oficialismo. Se entiende: perdieron las elecciones y buscan recuperarse entrando por la puerta trasera, enarbolando la bandera de la concertación. Por su parte, el gobierno habla igualmente de la necesidad de la unión nacional frente a la emergencia económica pero se cuida muy bien de poner en marcha los mecanismos institucionales para hacerla efectiva.

El hecho es que el país atraviesa una coyuntura económica adversa en paralelo a la puesta en vigencia de las instituciones de la democracia; en un escenario semejante no hay mucho margen para entregarse a la libre exacerbación de los antagonismos. En el Congreso las relaciones entre peronistas y radicales están muy tensas: la oposición puede bloquear, si se lo propone, la gestión de Alfonsín porque este no tiene mayoría propia en el Senado. La búsqueda de acuerdos para afrontar los problemas económicos pareciera imponerse. Sin embargo, no se observan señales de que se avance en esa dirección. Las reservas del oficialismo a la hora de emprender ese camino deben mucho a sus pretensiones políticas. El clima triunfalista de los radicales luego del desenlace de los comicios, el desconcierto que

ganó a las filas peronistas, potenciaron las ambiciones de los seguidores de Alfonsín: existe en ellos la pretensión de construir un nuevo movimiento hegemónico. Considerada desde este ángulo, la política de acuerdos aparece contradictoria con sus aspiraciones; en los hechos sería como tirarle una soga y rescatar de su ruina a los mismos adversarios que busca desplazar del centro de la vida política. Lo cierto es que la descomposición del peronismo se produce más lentamente de lo que confían los radicales al tiempo que a ellos se les complica el frente económico-social.

La necesidad de frenar la inflación y afrontar los compromisos de la deuda externa ha ido diluyendo el confiado optimismo con que el gobierno encaró las cuestiones económicas. Se ha decidido ir al Fondo Monetario para solicitar ayuda financiera y se sabe que los que van a golpear esa puerta suelen regresar con un programa de ajuste bajo el brazo. Pero ¿cómo poner en práctica medidas de ajuste sin contar con un mínimo acuerdo de las fuerzas de oposición? Si ese entendimiento no existe es muy probable que sobrevenga una escalada de conflictos laborales y que se produzca un aislamiento político del gobierno. Los problemas de la hora parecen promover una política de acuerdos y la postergación de la ambición alfonsinista de transformarse en un movimiento hegemónico. La recién reconstruida democracia de los argentinos difícilmente logre echar raíces y afianzarse si se polariza la escena política al compás de los enfrentamientos entre radicales y peronistas.

A esta compleja coyuntura hemos llegado al cabo de cien días de gobierno. En Argentina todo tiende a moverse demasiado rápido. Al arribar al gobierno Alfonsín decidió que no era el momento de hablar crudamente de la crisis por temor a que se desvaneciera la esperanza puesta por los argentinos en el retorno de la democracia. Pero la crisis existe. Los indicadores son elocuentes: caída de más del 15% del ingreso nacional al cabo de los últimos tres años, una inflación anual de más del 640% a fines de 1983, déficit fiscal de alrededor del 10% del producto. A este cuadro se suma un monto de deuda externa que

representa el 68% del PBI, un atraso en el pago a los acreedores por 3.000 millones de dólares, un muy bajo nivel de reservas internacionales.

En circunstancias tan difíciles, dos son, en principio, los mecanismos para inducir moderación en el comportamiento de los agentes económicos: una política de concertación o una política recesiva. Esta última opción será tanto más brutal y riesgosa cuanto más se demore una salida negociada. La autoridad política de Alfonsín todavía se mantiene alta pero es dudoso que se conserve intacta si proliferan los conflictos y reaparece el viejo espíritu especulativo: la pérdida de confianza en la capacidad del gobierno para manejar la economía puede llevar a muchos a jugar en contra y salir a la compra de dólares esperando lo peor. ¿Es esta una perspectiva demasiado sombría? Sería bueno que no lo fuera pero no estoy seguro de ello. Me temo que la vuelta a la democracia no ha cancelado los antiguos reflejos; las fuerzas de inestabilidad todavía están vivas y lozanas entre nosotros. Al respecto, ha causado revuelo la agencia AP al hacer circular a principios de marzo el informe de una consultora yanqui, Beri (Business Environment Risk Information), pronosticando un golpe de Estado antes de 1987.

Soy consciente de que comento muy parcialmente estos cien días de gobierno al concentrarme sobre los problemas y los dilemas de la política económica. Hay otros aspectos que merecerían ser comentados, como por ejemplo el ajuste de cuentas con el pasado en el juicio por la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar. Pero de este evento a todas luces extraordinario en la experiencia de las transiciones a la democracia no voy a ocuparme hoy. En resumen, tenemos por delante un gobierno que va descubriendo los desafíos de la emergencia y recorre penosamente el camino que va desde los discursos de la campaña electoral al forzado reajuste a las restricciones que le impone la realidad económica y política. No todos los hombres de este gobierno están a la altura de las circunstancias: hay en muchos un exceso de voluntarismo, una falta de profesionalidad. Es probable que, en un balance

ecuánime de su trayectoria, esas limitaciones sean comprensibles. No obstante, la comprensión no disminuye en nada sus carencias. Hay sí en la persona de Alfonsín una gran muñeca política. Pero un gobierno es también un ejercicio de administración y en este plano deja que desear. Es verdad que siempre se puede aprender. La pregunta es si este país que tenemos le dará a los radicales la oportunidad de hacerlo. Para acompañar el desenlace de este interrogante me he propuesto comenzar a grabar mis impresiones.

27 de abril

Hoy comienzo con mis grabaciones. Lo hago con el ánimo deprimido. Hace dos días ese era el clima reinante en la oficina de la Secretaría de Planificación. Fui a ver a Juan y me dijo al verme: “Decime algo, levántame el ánimo, estoy caído”. No le pregunté la razón, era innecesario. Podía adivinarla. Pocos minutos más tarde me encuentro con José Luis y ahí nomás, sin que yo le preguntara, me dice: “Juan Carlos, estoy deprimido, ¿para qué estamos trabajando?”. Ese era el clima de hace dos días y a ese clima he terminado plegándome yo mismo en el día de hoy. Diría que es el resultado de la información que cotidianamente recibimos. Hace dos días, sobre el final de la tarde, vino Mario Brodersohn, que está al frente del Banco Nacional de Desarrollo, a compartir con nosotros su estado de ánimo. “Esto no va más. La política antiinflacionaria del gobierno ha fracasado. Llevamos ya dos meses de una inflación del 20%. Hay que hacer algo.” La convocatoria a hacer algo se repite una y otra vez. A cada rato, uno de nosotros o algún amigo viene y nos dice: algo hay que hacer. La novedad es que, a veces, frente a la pregunta, la respuesta inmediata es la siguiente: “Pero ¿qué es lo que hay hacer?... Porque”, decía Mario, “confieso que no sé, no encuentro una alternativa. Realmente no sé. ¿Y ustedes?”. Y a su pregunta, la respuesta que recibe entre nosotros es: “Entonces... ¿por qué no pensarla?”. En el contexto psicológico del día, la respuesta de Juan a esa pregunta fue ilustrativa de nuestro estado de ánimo, que se potencia además porque ese ejercicio intelectual tiene por marco un

obstáculo de orden político: ¿cómo es posible pensar una política económica sin saber si al cabo de ese ejercicio habrá una autoridad política capaz de llevarla a la práctica? Porque lo que está bloqueando la busca de alternativas no es sólo la incertidumbre técnicamente formulada. También gravita el hecho de que cuando miramos alrededor, tanto en el gobierno como en el partido radical, no se ve quien comparta con nosotros la percepción de la gravedad del momento que vivimos. Esta percepción no es entre nosotros el resultado de mirar el partido desde la tribuna. Desde muy temprano, y más allá de nuestro cometido oficial —pensar una estrategia de desarrollo—, Alfonsín ha involucrado a Juan y los amigos en la discusión del inquietante corto plazo.

Para tener una idea más concreta del lugar donde estamos, a continuación transcribo el relato que Adolfo grabó a pedido mío al regresar hace unos días de Washington, adonde viajó encabezando una misión para realizar conversaciones con el FMI. A fin de poner en contexto esa misión destaco lo que ocurrió el 1 de abril. Ese día, a pocas horas de que venciera el plazo para que los bancos acreedores pasaran a pérdida los intereses por 500 millones de dólares que adeudaba Argentina, tuvo lugar lo que la prensa llamó “un plan de rescate financiero”: los gobiernos de México y Venezuela con 100 millones cada uno, los de Brasil y Colombia con 50 millones cada uno, Argentina con 100 millones y los bancos comerciales con una suma similar reunieron los 500 millones y evitaron el crack. A su vez el gobierno de EE.UU. se comprometió a poner los 300 millones de dólares desembolsados por los países amigos una vez que Argentina llegara a un acuerdo con el FMI en el plazo de treinta días. El secretario del Tesoro del país del Norte afirmó a la prensa que “el mundo pudo haberse precipitado a una crisis de endeudamiento ya que la Argentina podría haberse convertido en un ejemplo para otros países de no haber mediado dicha operación”. Con este antecedente, la delegación argentina llegó a Washington y nos enteramos de sus peripecias a través de las palabras de Canitrot.

¿Por qué fuimos al Fondo? Fuimos porque la Argentina se comprometió a un acuerdo financiero en la negociación con los bancos acreedores. Esta era una exigencia de los bancos

para los cuales la palabra del Fondo representa una garantía de que Argentina va a cumplir. Ellos necesitan un papel con el sello del FMI para poder conceder una refinanciación de la deuda. Es un requisito formal: los directivos de los bancos se sienten respaldados si cuentan con el visto bueno del FMI, lo crean o no lo crean.

¿Qué es lo que pide el Fondo? Los funcionarios del Fondo van a hablar de filosofía económica pero, básicamente, lo que quieren es ver la cuenta fiscal, la cuenta exterior y la cuenta monetaria. La cuenta exterior la necesitan porque está en juego la capacidad de pago del país; la cuenta fiscal, porque repercute sobre la cuenta exterior, y la cuenta monetaria, porque tiene que ver con la tasa de inflación, con el manejo de la economía y la capacidad de controlarla. A todo eso el Fondo le agrega además política de salarios, política de devaluación, etc., pero en verdad con esas tres cuentas las otras políticas están implícitas; uno no necesita poner una hipótesis de salarios ya que al poner una hipótesis de déficit fiscal ya está definiendo los salarios públicos y, en buena medida, el resto de los salarios. En los hechos, cuando se discuten esas tres cuentas se está discutiendo el conjunto de la política económica. Un instrumento clave de esa discusión son las metas nominales. El Fondo le pone al programa del país una determinada cifra de déficit en términos nominales, y con ella creen controlar la tasa de inflación y, en definitiva, el déficit real. Ellos operan a partir de un extracto de metas mínimas, que obligan a redefinir todo.

Nosotros llevamos las tres cuentas. De las tres, la externa y la monetaria eran razonablemente buenas. La cuenta fiscal que llevamos era mala. Técnicamente era mala y descansaba sobre hipótesis muy difíciles de sustentar. Partía de que el déficit iba a bajar pero sin reducir el gasto, que en realidad aumentaba; lo que se incrementaba en forma brutal eran los ingresos, en la cual mucho no creíamos. Para preparar el viaje estuvimos reunidos unos diez días durante los cuales tratamos que la gente de la Secretaría de Hacienda hiciera

un presupuesto 1984 más o menos decente, pero se tropezó con serias dificultades técnicas. Y esto porque al llegar al ministerio Bernardo Grinspun rajó a todos los tipos que sabían hacer las cuentas y los que están ahora son muchachos que están aprendiendo. Y si bien hacer las cuentas no es una ciencia muy misteriosa, es algo que se aprende trabajando, hay montones de detalles que requieren experiencia. Hoy, por ejemplo, revisando los números veíamos que el rubro de “otros gastos corrientes” aumenta de 0,2% del PBI a 1,8%, un aumento fabuloso, espectacular. Y nos dimos cuenta que era porque se habían contemplado los intereses que tienen que pagar las empresas del Estado, que habían sido sacados por una martingala contable y ahora los habían vuelto a poner estos muchachos que son inocentes y los computaron donde debían estar mientras que el año pasado los tipos de Hacienda, que eran más ranas, los habían sacado y puesto en otra cuenta. Estas son las cosas que sabe un tipo que sabe; estas trampas no las conocen los inocentes.

Estas eran las dificultades con las que teníamos que lidiar. Por lo tanto llevamos una mala cuenta fiscal. Con esta preocupación por el estado de las cuentas y antes que yo viajara, Juan le pidió una entrevista al presidente el viernes a la noche, a la que asistí. Estuvimos con él una hora, le contamos todo y luego de oírnos Alfonsín nos dijo que de ningún modo iba a autorizar una reducción de los salarios públicos. Y pidió que buscáramos de qué manera se podría zafar. Discutimos entonces otras alternativas pero no llegamos a nada y tuvimos que terminar la conversación porque el tiempo que excepcionalmente habíamos conseguido estaba agotado. De todos modos, Alfonsín nos dio una orden, el salario de los empleados públicos no se baja; le dijimos que el salario de los que trabajan en las empresas públicas es alto pero no dio el brazo a torcer y dijo que necesita esos salarios porque si no la gente se va de las empresas públicas; se me ocurre que alguien le debe haber dicho eso y lo ha convencido.

Salimos de viaje, le dije a Machinea que me acompañara, y llegamos junto con la gente de Hacienda a Nueva York el 15 de abril. Nos esperaba en el aeropuerto un ministro consejero de la embajada a las seis de la mañana. Nos saludó y nos dijo que teníamos que ir al Consulado, donde nos encontraríamos con Grinspun y el presidente del Banco Central, Enrique García Vázquez. Allí estuvimos a las ocho y media. No más de media hora más tarde se hicieron presentes. Era un día domingo con lluvia en Nueva York. Comenzó entonces la conversación para tratar los datos de la cifra de gastos y la cifra de ingresos en la cuenta fiscal que llevábamos. Miren lo que sale de déficit, señalé, el número está cerca del 8 o 9%, que es nuestro objetivo, pero para eso la hipótesis de ingresos es una locura y es incumplible, mientras que lo que aparecía en gastos era el considerable aumento que se había producido en los últimos seis meses, durante el nuevo gobierno. Esa conversación tuvo sus matices: el subsecretario de presupuesto Adalberto Rodríguez Giavarini se apresuró en darle al ministro todos los diarios de Buenos Aires del día anterior y en los que se destacaba con subrayados las partes donde se hablaba de él. Los recibió con entusiasmo y sucedió que mientras nosotros hablábamos en un rincón de la sala el ministro leía los diarios. Cada tanto oíamos sus comentarios, sus puteadas a tal o cual periodista. Por suerte estaba García Vázquez, que escuchaba y que captó inmediatamente todos los puntos conflictivos: pidió aclaraciones, tomó notas, hizo cálculos. A la vista de los números García Vázquez decía: “Con esto no podemos ir, Bernardo, es una barbaridad”, procurando atraer su atención, pero el ministro se limitaba a hacer aco-taciones, del tipo “¿Qué querés?, ¿querés subir los salarios y pagar la deuda?, eso no es fácil”, y no terminaba de involucrarse en la conversación. Esta conversación tuvo un trámite accidentado, como ocurre siempre que está él: se levantaba, se iba, hacía llamados telefónicos. Así estuvimos hasta que llegó la hora de almorzar, era ya cerca de las dos

de la tarde. “Acabemos con esto”, dijo Bernardo, y agregó: “El ministro invita a todos a un restaurante”. Terminado el almuerzo nos dijo: “Bueno, muchachos, suerte”, se despidió de nosotros y así nos fuimos a Washington.

Una vez allá, a la mañana siguiente tuvimos el primer contacto con el Fondo. Como era el jefe de la misión pedí ver a Wiessner Durand, que es el responsable de Hemisferio Occidental. Resultado: estaba de vacaciones. Pedí entonces ver, en segundo lugar, a Ferrán, el encargado de la negociación con Argentina: también estaba de vacaciones. Tercero, Aguirre, que se ocupa de cuentas fiscales: estaba internado en un hospital enyesado porque se había quebrado una pata. Al final comenzamos las conversaciones con funcionarios de un nivel inferior. A lo largo de ellas estos dedicaron tres días a puntualizar cada número que traíamos, preguntando cómo y por qué llegábamos a ellos, haciendo un interrogatorio detalladísimo. El verdadero recurso de estos tipos, que son verdaderos contadores fiscales, es su experiencia en analizar presupuestos públicos; nos impresionaron por su conocimiento meticuloso.

Aprovecho ahora y menciono tres importantes eventos que marcaban el contexto en que teníamos esos intercambios. Al llegar a Washington fui a la oficina de nuestro representante ante el Fondo, Mario Teijeiro, y este me dijo que había recibido poco antes un llamado de Mister Truman –Edwin Ted Truman–, miembro de la Federal Reserve, creo que tercero en la jerarquía, preguntando si nosotros ya habíamos llegado. Teijeiro me comentó que en los años que llevaba en su cargo era la primera vez que recibía un llamado desde la Federal Reserve. El llamado se justifica: el gobierno sigue de cerca la cuestión de la deuda externa porque los principales acreedores son bancos norteamericanos. Otro evento fue que al segundo día de nuestras reuniones en el Fondo apareció Ferrán; nos dijo que había recibido un cable donde lo conminaban a interrumpir sus vacaciones en Barcelona y le ordenaban tomar el primer avión.

Me sorprendió su presencia: esto quería decir que nuestras conversaciones tenían la máxima prioridad. Después apareció el uruguayo Aguirre que se ocupaba de cuentas fiscales con la pata al hombro; lo sacaron del hospital y lo trajeron. Tuvimos claro entonces que nuestra presencia en Washington no era para la joda y que había un gran interés.

Como señalé, fueron tres días dedicados a revisar nuestros números, sesiones de mañana y de tarde, muy cansadoras, donde quedó en evidencia que nuestras cuentas fiscales eran lamentables. No la sacamos barata ante ese tribunal de los contadores fiscales que preguntaban y preguntaban. Durante el interrogatorio nos metieron varios goles porque estábamos flojos de números, sobre todo los fiscales. A raíz de eso, como jefe de la misión decidí dejar de lado el presupuesto 1984 que llevábamos porque ofrecía un flanco débil: les dije que se lo entregaríamos más adelante. Luego de terminada la revisión de los números llegamos a la mañana del día jueves. Nosotros teníamos previsto regresar al país el viernes. Los del Fondo nos dijeron que recién después de las cuatro de la tarde del jueves volverían a vernos para darnos una devolución. Antes de empezar con el paréntesis que nos proponían les dediqué varios párrafos hablando del encuadre político de nuestra misión. Así dije que no queremos patear el tablero, pero tampoco queremos exponer al país a experimentos drásticos; venimos de un país que ha sido siempre agitado por profundas sacudidas y el gobierno tiene un compromiso de atender las necesidades de los sectores sociales con moderación, lo contrario sería provocar una escalada peligrosa de conflictos; descartamos pues una maxidevaluación porque en Argentina falta un requisito indispensable para hacerla, que es contar con un gobierno en condiciones de desplegar una gran capacidad de represión y abortar en consecuencia la transición a la democracia en la que estamos empeñados.

Aproveché el tiempo que tenía hasta las cuatro de la tarde para verlo a Raúl Prebisch, nombrado por Alfonsín como

asesor económico. La situación de Prebisch y el gobierno estaba complicada. En Washington él había hecho unas declaraciones muy críticas sobre el momento económico argentino que cayeron muy mal. Alfonsín había pedido que regresara a Buenos Aires e hiciera una conferencia conjunta con Grinspun y García Vázquez para mostrar que existía unidad en el frente económico. Pero Prebisch se había empacado y no quería viajar. En la entrevista con el presidente el viernes antes de mi partida, a la que ya me referí, se trató el tema. Yo pregunté: ¿qué hago? Y me dijeron: “Si querés hablar con él, hazlo, es cosa tuya”. Por cortesía eso fue lo que hice. Cuando a mi llegada lo llamé para decirle que veníamos a negociar con el Fondo, tuve una conversación muy corta, me despachó muy rápido con un “Que le vaya bien, mi amigo” y no me dijo una palabra más, a raíz de lo cual comprendí, y se lo comenté a Sourrouille por teléfono, que estaba muy enojado porque lo habían mandado al frente con una hipótesis de déficit que no está respaldada por los números, sentía haber sido manipulado con datos equivocados. Como el sábado tenía tiempo libre hasta la reunión de las cuatro de la tarde le pedí a Ernesto Gaba, funcionario del Central, que era parte de la misión, que le preguntara a Prebisch, con el que tenía un buen trato y a quien ya le había adelantado el estado de las negociaciones, si yo podía ir a visitarlo. “Cómo no, que venga nomás.” Mi conversación con Prebisch fue muy cordial. Él me expresó su profunda preocupación sobre las inconsistencias del programa, me dijo que la cosa no iba, que estaba muy alarmado por el previsto aumento del salario en el sector público. Yo le señalé que también nosotros estábamos preocupados por las inconsistencias del programa; eso lo sorprendió: “Yo pensé que Sourrouille y usted estaban en otra cosa”. “De ningún modo”, le respondí, “también estamos inquietos y se lo hicimos saber al presidente”. “Entonces”, continuó él, “no hay que perder tiempo, hay que hablar con el presidente, hay que hacerle entender que esto así no va, que se está desbarrancando, que es una locura. Me alegra mucho saber

que coincidimos y cuando regrese a Buenos Aires vamos juntos a ver a Alfonsín”.

Llegaron las cuatro de la tarde y fuimos a la reunión en el Fondo. El resultado fue muy desalentador. Todo mi discurso previo sobre el encuadre político de la política económica —la consigna de la moderación, de avanzar de a poco en medio de la emergencia— no sirvió para nada. Ferrán tomó la palabra y nos tiró unas cifras absolutamente indigeribles. Yo estimaba que llegar a un déficit de tesorería del 8% como habíamos pensado para el primer trimestre de 1985 iba a ser una empresa muy difícil, y que llegar al 6% que había comprometido Prebisch en un memorándum a De Larosiere era un disparate. Pues bien, Ferrán propuso la cifra del 3,5% para el tercer trimestre de 1984, o sea, dentro de los próximos dos meses, y también el 3,5% para el primer trimestre de 1985. Calculé que los más o menos cuatro puntos respecto de nuestra hipótesis implicaban una caída de los salarios públicos del 30%. Una vez que Ferrán dijo lo suyo tuve que sujetar a Machinea, que estaba al lado mío, que quería saltarle a la yugular, en un ataque de bronca. Yo opté por el humor. Ferrán continuó diciendo que eso era lo que tenían que decir sobre la cuenta fiscal y nos sugería que podían examinar más tarde la cuenta monetaria y la cuenta externa. Yo le dije: “Joaquín, dímelo todo de una vez”. Mi salida provocó grandes carcajadas. Continuó, entonces, con las otras cuentas y fue así que una vez que terminó con todas las cifras le dije, en un tono de sorna: “¿Alguna otra cosita?”, como queriendo decirle: “Decí la cifra que quieras, ¿qué más?...”. Yo estaba en esa actitud; en cambio, José Luis hacía esfuerzos por contenerse mientras me decía por lo bajo: “¡Yo a este le pego!”. En resumen, nuestra mayor debilidad estuvo siempre en el frente fiscal pero la propuesta de Ferrán me pareció un despropósito. La teoría que está detrás de ella es más o menos así: sugieren un número brutal para que la gente se dé cuenta que esto va en serio, esto es, sostenían que la gente sólo va a creer en que no va a haber más

inflación cuando ustedes muestren que están dispuestos a ir a fondo. Por suerte, al abordar las otras cuentas hicimos mejor papel en las discusiones, recibimos algunas críticas razonables pero gracias a la capacidad técnica de Gaba en la cuenta monetaria y la de Juan Sommer, también funcionario del Central pero amigo nuestro, en la cuenta externa y las intervenciones de José Luis, siempre solventes, no recibimos más exabruptos. Al dar por terminada la reunión yo adopté la única actitud que me sale naturalmente en estos casos: no tiré la mesa al suelo, no me puse a gritar a grito pelado. Les di las gracias por la atención y me despedí, acordando volver a vernos pronto.

Nos fuimos luego a la oficina de Tejeiro y al poco rato recibimos un llamado telefónico del Treasury Department por el que me invitaban a una reunión urgente con David Mulford, el número dos en la jerarquía. Allí fui y me recibió, alto, atlético, buen mozo, que muy serio me dijo que quería hacerme saber la preocupación del gobierno de los Estados Unidos por el estado de nuestras negociaciones con el Fondo. La rapidez con la que se montó la entrevista, la franqueza de sus palabras me llevó a pensar, para mis adentros, que si alguien dudaba de la existencia del Imperio ahí lo teníamos, en carne y hueso. Luego, me preguntó: “¿El 30 de abril estará terminado el trabajo con el Fondo?, ¿cómo lo ve Ud.?”.

El intercambio con Mulford me abrió otra perspectiva sobre la situación en que nos encontramos. El gobierno norteamericano está en un doble juego de presiones: sobre nosotros pero también sobre los bancos. El papel del Fondo en ese doble juego es ofrecer un reaseguro de que las deudas serán pagadas. El aval del Fondo sobre las cuentas argentinas le sirve al gobierno norteamericano para dirigirse a los bancos y reclamarles que acepten parte de la pérdida en las deudas. El objetivo es salir del paso y evitar un default que contagie a otros países deudores y ponga en riesgo el sistema bancario yanqui. Nosotros nos hemos convertido en un caso ejemplar.

Hace unos días se hizo una conferencia de despedida al capo del Citicorp, una figura de gran prestigio en el ambiente de las finanzas, estuvo todo el mundo, y cuando este señor tomó la palabra para agradecer el homenaje le dedicó casi diez minutos a la Argentina, no a Brasil, no a México, sí a la Argentina; estamos claramente en medio del quilombo. El gobierno norteamericano está haciendo presiones entre bastidores sobre los bancos y no lo puede hacer a la vista de todos porque la actitud de la opinión pública de EE.UU. hacia los bancos es espantosa. Y por supuesto presiona también sobre nosotros a través del Fondo. Grinspun espera que prevalezca un enfoque político de la deuda externa y que el gobierno norteamericano apriete a las autoridades del Fondo para que nos den el aval. Yo no sé qué pensar. Creo que eso podría ocurrir pero no antes de que nos tuerzan el brazo. Ellos están convencidos de que tenemos que aplicar un plan de ajuste y estamos en desventaja porque nuestras cuentas son desastrosas y no podemos plantarnos y decir que es ilógico que nos presionen como lo hacen. Según están las cosas, ni el presidente, ni el partido, ni el país están preparados para lo que viene. Con mejores números y un programa económico más serio sería otro cantar.

Así terminó diciendo Adolfo en la grabación que hicimos a su regreso.

Continúo ahora con mis impresiones en este 27 de abril. Ayer estuve en la Secretaría de Información Pública, donde están preparando el discurso de Alfonsín ante el Congreso del 1 de Mayo; por indicación de Juan, fui a ver cómo se estaba armando. Allí conversé con uno de los convocados a la tarea, el periodista Rodolfo Pandolfi. Fue una conversación curiosa. “Estamos trabajando”, me dijo, “en la redacción del Libro Negro del Proceso. Es preciso que el país sepa lo que hemos recibido”. Y así hablaba; sus argumentos no apuntaban, sin embargo, a definir las tareas del gobierno. Aproveché entonces para razonar, si se quiere un tanto provocativamente: “Pero si la herencia es un desastre, la situación actual es

por lo tanto un desastre; en consecuencia, el margen de manobra con el que cuenta el gobierno para actuar no es muy grande, es más bien limitado. Por lo tanto las promesas que se hicieron durante la campaña electoral debieran ser redefinidas porque no pueden cumplirse todas”. La sorpresa de mi interlocutor frente a este razonamiento me pareció sugestiva. En la cabeza tenía, por un lado, la preocupación por personalizar en el régimen militar la situación de crisis que recibió el país y en el otro costado, como en un lóbulo independiente, estaba la idea de lo que debe y puede hacer el gobierno de ahora en más. Y las dos cosas no se juntaban. Como si hablar de la crisis consistiera exclusivamente en buscar a los responsables y no hacerse cargo de las restricciones que ella impone a la política del gobierno. La conversación con Pandolfi giró alrededor de las cuestiones a abordar en el discurso. Me dijo que, al tomar posesión del gobierno, el tema filosófico-político dominante del discurso de Alfonsín descansaba en la siguiente consigna: el fin no justifica los medios. En este, que está en preparación, para el 1 de mayo, la consigna o el tema dominante será la necesidad del diálogo, la necesidad de la convergencia. Más tarde, por la noche, cuando le contaba a Ana María sobre estos temas del discurso de Alfonsín, me hizo una observación interesante, muy valiosa. La referencia o la preocupación por el acuerdo es un argumento dirigido a la clase dirigente, sean dirigentes de los partidos o de las corporaciones. Pero en un discurso a la nación ese argumento debe ser complementado por otro que interpele al público más vasto que es su audiencia. Ese otro argumento debería ser la necesidad de la solidaridad frente a los problemas de la hora. El llamado a la solidaridad tiene por interlocutor a la población en su conjunto. Si la población no se hace cargo de la situación presente, si la población no se moviliza en función de un llamado a la solidaridad tan necesaria para consolidar la transición democrática, cualquier política de acuerdo en las alturas queda suspendida en el vacío. Conclusión: es necesario articular tanto la referencia al acuerdo que se dirige a la clase política como una referencia a la solidaridad que se dirige a la población.